

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

En esta causa RUC N° 1900522329-9, RIT 78-2020, del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por sentencia de siete de junio último, se condenó a **Jorge Luis Pereira Núñez** en calidad de autor por el delito de violación reiterada, previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, a la pena de dieciocho años de presidio mayor en su grado máximo, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, además de las penas accesorias de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa; quedando asimismo, con sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar a Carabineros de Chile cada tres meses su domicilio actual; y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con personas menores de edad.

Asimismo, fue condenado como autor de dos delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en relación al artículo 5° de la Ley 20.066, en grado de ejecución consumado, a dos penas de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo más accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

En contra de esa decisión la defensa del condenado interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública de 20 de julio pasado, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de nulidad en su causal principal, se sustenta en lo dispuesto en el artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342



letra c), y ambos vinculados con lo dispuesto en el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, en tanto el fallo en cuestión transgredió el principio lógico de la razón suficiente en lo que respecta a la determinación de la existencia del delito de violación reiterada. En efecto, advierte que durante el juicio se cuestionó, entre otras cosas, la imposibilidad de acreditar la reiteración de los delitos de violación que indica la acusación fiscal, en atención a que el relato de la víctima indicando accesos carnales del acusado hacia su persona no pudo corroborarse por la prueba científica rendida en el juicio oral, pues a este respecto solo obra la declaración de seis testigos y documental que resulta insuficiente para esta finalidad. Es así como declaró la perito Karime Hananías Guarnieri, quien refiriéndose al examen sexológico N° 2434-19 de fecha 7 de septiembre de 2019 practicado a la víctima, expuso que este concluyó que la menor presenta un himen con signos de trauma himeneal antiguo, no pudiendo establecer la data de dicho trauma; constatando que no se consignaban lesiones traumáticas recientes y que tampoco presentaba alguna compatible con acción de roce o tocación, ni lesiones extragenitales o anales traumáticas recientes ni cicatrices.

Frente a las aludidas conclusiones, sumado al hecho de que se demostró que la víctima -durante la fecha de los hechos- mantenía actividad sexual con otra persona distinta al imputado, según lo señaló la perito sicóloga Paula Esquivel Adaos, permite asentar que la versión de aquella no se encuentra corroborada con esta prueba pericial científica sexológica rendida en juicio, tal como se dijo, atendido que no se puede desatenderse que los signos de trauma himeneal puede ser indicio de diversas situaciones pero difícilmente podría constituir un elemento corroborador de la acusación.

El tribunal trató de justificar estas inconsistencia, empero la circunstancia afirmada por el mismo en cuanto a que los supuestos ataques sexuales ocurrieron desde el año 2017 no constituye una razón suficiente, sino simplemente aparente, en tanto ese análisis no ahondo en lo que señala el informe sexológico. Tampoco indica de qué modo



ratifica la versión de la víctima, a lo que se añade que no existen elementos que permita determinar la data de inicio de las supuestas agresiones, menos que hayan principiado en el año 2017.

La sentencia sobre el mismo asunto asevera que resulta indiferente que la ofendida haya iniciado una vida sexual consentida, sin embargo con ello evade la discusión en torno a la prueba científica, olvidando que se trata de un elemento que la referida prueba ratifica, además de descartar las supuestas agresiones sexuales reiteradas hacia su persona, en razón de que es imposible determinar científicamente la fecha de las lesiones en el himen, más cuando podrían corresponder a relaciones sexuales consentidas.

Esta ausencia de razón suficiente también se evidencia en la argumentación que apunta a que la versión de la supuesta víctima se encuentra corroborada por los dichos de su madre Ana Gálvez, en atención a que esta no reconoció haber presenciado un acceso carnal, sino únicamente haberlos visto desnudos, pero sin describir alguna situación que corrobore el tipo penal y mucho menos el aludido relato puede ratificar las violaciones reiteradas.

En consecuencia, no existe ningún elemento probatorio que pueda respaldar lo aseverado por la ofendida en lo relativo al acceso carnal propiamente tal y las razones contenidas en la sentencia para entender satisfechos los elementos en lo relativo al tipo penal, son insuficientes.

2°.- Que el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: “Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) Cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e)”. Por su parte, el artículo 342 del mismo Código, en su letra c) señala que: “Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal



Penal expresa que “Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”.

“El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo”.

“La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegue la sentencia”.

3°.- Que, entonces, es cierto que la legislación procesal penal no ha dado libertad absoluta a los jueces del fondo a la hora de valorar la prueba rendida y establecer tanto el delito como la participación, pues siempre han de respetar la racionalidad, la coherencia y la razonabilidad que los conduce a resolver en un determinado sentido. Se trata, en fin, más que de no vulnerar principios de la lógica filosófica, simplemente, en la labor de ponderación de la prueba, de respetar el sentido común, la sensatez. La octava acepción de la palabra “lógica” dada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la que más se adecua a la que el legislador menciona en el citado artículo 297: “Modo de pensar y de actuar sensato de sentido común”. Couture resume el significado de las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano”.

4°.- Que esta Corte de manera reiterada ha señalado que la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal en relación al requisito establecido en la letra c) del artículo 342 de ese cuerpo normativo, habilita la revisión de la sentencia desde un doble enfoque. El primero, apunta a que la decisión contenga razones y que ellas sean capaces de justificar cómo y por qué se dan o no por probados los



hechos que se cuestionan en el recurso; y, en segundo término, es dable examinar que esas razones expresadas se ciñan a los parámetros de valoración probatoria inherentes a la sana crítica, esto es, que no contradigan las reglas de la lógica, de la experiencia o de los conocimientos científicamente afianzados.

5°.- Que, en el caso específico, el escrutinio que se predica apunta a una supuesta carencia de la fundamentación lógica para establecer que el encartado adecuó su conducta al tipo penal en cuestión, alegando por intermedio de esta causal de nulidad, el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica de la razón suficiente. Así, aparece que lo que se achaca a la sentencia impugnada es que no cumple con expresar los motivos que permitan reproducir el razonamiento utilizado para fundar la condena, pues entiende la defensa que no contiene una justificación bastante para estimar probado el hecho imputado (violación) en carácter de reiterado, en tanto no se hizo cargo, realmente, del informe pericial cuyo mérito no se condice con la conclusión a la que arribaron los jueces.

6°.- Que el tribunal base, asentó, en lo pertinente, el siguiente hecho: “En días y horas indeterminados, aproximadamente desde junio del año 2017 y siendo la última vez el día 15 de mayo de 2019 en horas de la mañana, en el domicilio ubicado en Avenida Pedro Aguirre Cerda 3779, departamento 21, comuna de Estación Central, Jorge Luis Pereira Núñez, procedió, respecto de su hija de iniciales R.C.P.G. nacida el 27 de octubre de 2002, a introducir su pene en la vagina de la misma, a la vez que la amenazaba que si hablaba la mataría a ella, a su madre y hermano menor”.

7°.- Que en la sentencia cuestionada, las reflexiones vertidas acerca del extremo que interesa es posible advertirlas de un modo extensamente desarrolladas a partir del motivo 8°. Se evidencian allí un examen pormenorizado de los medios de prueba reunidos y en particular la construcción de los indicios a partir de los cuales los sentenciadores concluyen tanto el hecho punible como la participación que en él cupo al acusado en el delito al que fue condenado. En efecto, el alegato de



ausencia corroboración que la defensa esgrime, desatiende los razonamientos de la decisión, según se pasa a explicar.

8°.- Que en la construcción del recurso se pasa por alto el testimonio de R.C.P.G.: Sobre ello, como se ha sostenido por la jurisprudencia -siguiendo a la doctrina española- los dichos de la víctima en juicio puede ser valorados como prueba de cargo, empero se han exigido algunos requisitos mínimos a fin de descartar que esta declaración se encuentre motivada por una ganancia secundaria, y por ende, no sea veraz. Según se ha dicho, la declaración del testigo víctima, al no ser imparcial, requiere de ciertos atributos para ser considerada en la decisión de condena. Así, a pesar de reconocerse en la víctima un interés directo en la condena, ello no es suficiente para negar valor probatorio a su declaración, pero para ello es menester incorporar algunos presupuestos en su valoración cuando es la única prueba de cargo. De esta forma, se ha considerado necesario comprobar tres aspectos de la declaración, estos son: a) la ausencia de razones que excluyan o debiliten seriamente la credibilidad de la víctima testigo; b) la existencia de elementos objetivos que corroboren su versión y; c) la consistencia interna de sus manifestaciones.

En cuanto al primer aspecto, la doctrina ha señalado que se trata de valorar si la víctima ha sido sincera en su declaración, atendiendo a si hay razones para considerar que su relato no es verídico. Sobre el segundo aspecto, es aconsejable demostrar la verosimilitud del testimonio mediante la corroboración de determinados datos periféricos de carácter objetivo, más allá de la manifestación de la víctima. En cuanto al último, debe existir persistencia en la incriminación, es decir, es necesario que el testimonio de la víctima se mantenga durante todo el proceso, firme, coherente y concreto.

9°.- Que en lo que al presente examen importa, y como cuestión primigenia, debe apuntarse que no existió una teoría alternativa de la defensa. Ello es de vital relevante para entender el desarrollo del fallo. Luego, no se observa del reproche del recurso ningún dato que permita desvirtuar, a la luz de su naturaleza, la declaración de R.C.P.G. Por el



contrario, el camino seguido por el juzgador se ciñe a los parámetros acordados por la doctrina y la jurisprudencia. En efecto, no se visualiza una recriminación a la declaración de la víctima en términos tales que pueda dudarse de su imparcialidad. A continuación, existen al menos cinco datos periféricos de carácter objetivo que corroboraban su declaración: el testimonio de la madre, doña Ana Gálvez Herrera, quien expresó que un día en la noche, escuchó desde el dormitorio de su hija, que se encontraba con la puerta trancada, que ella decía “por ahí no, me duele”, agregando que a pesar del impacto que ello le ocasionó, decidió abrir la puerta y al ingresar, observando al acusado con los calzoncillos abajo y a R.C.P.G. recostada encima de la cama con “el poto para arriba”. Ante aquella escena, increpó al condenado, oportunidad en que este la insultó y golpeó, según detalla. Al día siguiente, ayudada por su hijo, estampó la denuncia ante la Policía de Investigaciones. Posteriormente, su hija le contó que el acusado abusaba de ella desde antes que lo sorprendiera, añadiendo que le pegaba y la maltrataba, que la violaba a la fuerza y que por temor no había contado, puesto que la amenazaba con matarla a ella y sus hermanos; estos hechos, según le confidenció, acontecían cuando ella (madre) iba a trabajar. Sobre los hechos, asevera que sospechaba de su ocurrencia, ya que su hijo menor los vio y le contó a la directora del colegio, a quien no quiso creerle “hasta que lo vio con sus propios ojos” (sic). En esta misma línea, declaró el hermano mayor de R.C.P.G., José Luis Pereira Gálvez, el que contextualizó el ambiente de violencia que se producía en el domicilio del encartado y la víctima, pormenorizando el carácter de su padre, su situación penal, la cercanía que mantenía con su hermana y el relato de esta a propósito de la denuncia por violación en contra de aquel, refiriendo que su hermana dormía junto a su padre, en la pieza de esta, que existía “manoseo” y que su madre, dormía en otro dormitorio. Supo, además, de la denuncia efectuada por una profesora de su hermano menor respecto de estos hechos. Corrobora, asimismo, lo expuesto tanto por la víctima, como por su madre y hermano mayor, los dichos del funcionario actuante, inspector de la Policía de Investigaciones Osvaldo



Morales González, quien tomó declaración a la madre de Rocío, en los términos expuestos.

Ratificando lo dicho, también depuso la directora de la Escuela República de Austria, Norma Norambuena Castro, relatando que en el mes de junio de 2018, R.C.P.G. salió de la escuela sin autorización, teniendo el padre una orden de alejamiento y volvió media hora después, con comida. Al consultar a la niña al respecto, esta señaló que le había llegado el “período”, por lo que salió a comprar toallas higiénicas con su padre. Por lo extraño de la situación, refiere la testigo que le preguntó al hermano menor de R.C.P.G., quien le señaló que había visto situaciones de intimidad entre ambos -padre y hermana-, en tanto observó a R.C.P.G. masturbando al imputado, agregando que cuando ella se bañaba, el padre entraba al baño, y que dormían en la misma habitación, además de comentarle otras situaciones anómalas. Por estos hechos efectuó una denuncia, entrevistándose además con la madre de R.C.P.G., quien señaló desconocer los hechos, agregando que su hija dormía con su padre encerrada en el dormitorio, no teniendo conocimiento de lo que sucedía en el interior. Agrega que se enteró que la niña estaba embarazada y al consultarla fue cambiando la versión respecto de quien era el padre. Los dichos de esta testigo, se encuentran afianzados por lo aseverado por el subcomisario de la Policía de Investigaciones María Cristina Vergara Fuenzalida, quien tomó declaración a la docente en aquella oportunidad de la denuncia.

Sobre este tópico, se introdujo la declaración de la perito sicóloga Paula Esquivel Adaos, quien se entrevistó con R.C.P.G. y su madre, detallando la especialista la discapacidad en el área psicológica mental del 33,3% que presenta la víctima, el relato sobre los abusos desde antaño, la circunstancia de que la menor inició su vida sexual con una pareja. Evidenció el daño severo que presenta la niña, su ideación suicida, descartando ganancias secundarias de las entrevistadas.

Todo lo dicho se encuentra, por cierto, respaldado por la declaración de la perito Karime Hananías Guarnieri, que realizó el examen sexológico N° 2434-19 a la víctima. La doctora explicó que la



peritada le relató que su padre la había violado y que incluso había cursado un embarazo, sin tener claro si el niño era del agresor o de su pololo. Reseñó que a la niña le costaba mucho hablar, pero le indicó que su progenitor se encontraba en la cárcel, no sabía la razón y prefería no saberlo; presentaba mucha labilidad emocional, quiebre con llanto, sobre todo al examen físico, de manera que decidió no insistir en que le entregara un relato de los hechos. Agregó que la peritada posee una madurez neurológica menor a su edad cronológica, presentando una actitud infantil. Sobre el examen físico, observó un himen con cicatriz de desgarro antiguo completo a las 5 horas según los punteros del reloj, trauma que no es posible datar. Ello es asociado a lesiones secundarias de penetración vaginal con un pene erecto y en consecuencia, compatible con el relato de la víctima.

10°.- Que como se aprecia, en el establecimiento de los hechos y la participación del encausado en aquellos que se le atribuyó y se cuestionan, los sentenciadores explicitaron de manera clara y en extenso las piezas incorporadas al juicio que permitieron arribar a la decisión de condena. De este modo, debe destacarse que la corroboración (que se reclama contravenida) no conlleva la obligación de concurrencia de medios de prueba directos para asentar un hecho, sino que concierne a la necesidad de contar con elementos probatorios de confirmación que pueden referirse tanto a los hechos principales como a otros de orden secundario, que otorguen sentido a los primeros con el objeto de construir y explicitar la convicción, pues no debe olvidarse que el juez debe tomar en especial consideración la concordancia y conexión de las pruebas que utilice. En este mismo orden de ideas se ha señalado que “corroborar es reforzar el valor probatorio del aserto de un testigo relativo al hecho principal de la causa, mediante la aportación de datos de una fuente distinta, referidos no directamente a ese hecho, sino a alguna circunstancia que guarda relación con él, cuya constatación confirmaría la veracidad de lo declarado por el primero” (Perfecto Andrés Ibáñez, “Prueba y convicción judicial en el proceso penal”, Hammurabi, 2009, p. 125).



11°.- Que, entonces, no es efectivo que la sentencia solo contenga un razonamiento formal y no de fondo respecto a las inconsistencias que levantó la defensa en el respectivo juicio, en atención a que se descartó latamente la ganancia secundaria de la madre de la víctima (en la que no se insiste en el recurso), añadiendo que no resulta verosímil la aseveración de que el niño que esperaba R.C.P.G. y que nació muerto, tenía como progenitor a un sujeto diverso del encausado, desde que era este quien accedía carnalmente a la víctima en forma periódica desde el año 2017 (justamente por el relato de la niña, corroborado por los diversos antecedentes ya pormenorizados), sin que pueda encontrarse asidero a los dichos entregados por R.C.P.G. a la directora de su colegio y a la perito Hananías, respecto de la existencia de una pareja, en tanto no dio referencias de su identidad (no debe olvidarse que ante la profesora modificó la versión en este punto, al señalársele que se podían revisar las cámaras de grabación y otras circunstancias que permitirían corroborar la identidad de este tercero). Todo ello sin perjuicio de que la paternidad del niño no resulta relevante para estos efectos penales, ni mucho menos, la actividad sexual de la niña con un tercero -de existir y de estimarse que pudo ser consentida- atendida su edad y grado de discapacidad, pues lo cierto es que no por ello, no pudo ser víctima de las violaciones reiteradas investigadas en autos, tal como quedó demostrado en el proceso. Tal premisa, no solo resulta contraria a todas las reglas de la lógica, sino principalmente a la libertad sexual de una mujer.

En este mismo sentido, la estrategia de la defensa de atribuir la existencia de relaciones sexuales consentidas entre R.C.P.G. y su hermano José Luis, no solo resultó infundada como una teoría alternativa sino que además desterrada a raíz de la propia prueba rendida en juicio. Ese señalamiento erróneo también se produjo respecto del abuelo de la víctima, siempre con la finalidad de desviar la prueba y en particular las aseveraciones certeras e inequívocas de la niña respecto de su propio padre.



12°.- Que como corolario de lo que se dice, solo resta desestimar el cuestionamiento que plantea el arbitrio, dado que los jueces argumentan y sustentan su decisión condenatoria, en los términos que exige el artículo 342, letra c) del Código Procesal Penal, con relación a lo que prescribe el inciso final del artículo 297 del mismo cuerpo normativo, pues fácilmente se advierte que para establecer los hechos, se inclinaron por aquella hipótesis que aparecía mejor respaldada y que contaba con el apoyo en la totalidad de los medios de prueba producidos en la audiencia de juicio. Es en este entendido en el que debe comprenderse el fallo, dado que numerosos indicios permitieron alcanzar la certeza en relación con los elementos del tipo penal y la participación del encartado, demostrándose, en consecuencia, que lo que se reclama en definitiva por intermedio del arbitrio en examen, es la manera en que los sentenciadores asentaron los hechos mediante la ponderación de la prueba, lo que demuestra, en último término, que no se comparte el afincamiento de los mismos, como una crítica de mérito, sin apoyo cierto en la real transgresión de las reglas de la lógica que no pase por un desacuerdo con lo razonado y la aseveración implícita de la insuficiencia probatoria que emana de los dichos de la propia víctima.

13°.- Que habrá que desestimar el recurso por la causal que se invoca de modo principal, pues la valoración de la prueba que han efectuado los jueces base no ha quebrantado ningún principio lógico, y se encuentra provista de razones suficientes para arribar a la decisión.

14°.- Que, en subsidio, se esgrime por la defensa la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por infracción de lo dispuesto en los artículos 351 del mismo código y 361 del Código Penal. En efecto, en virtud, de la prueba rendida y su respectiva valoración, dice el recurso, el tribunal a propósito del delito de violación concluye que este es reiterado, desechando las argumentaciones de su parte, en torno a ser un delito continuado, influyendo tal calificación en lo dispositivo de la decisión al tiempo de determinar el quantum de la pena.

Explica los requisitos del delito continuado, entendiendo que en la especie concurren íntegramente, pues existe una multiplicidad de



hechos, así lo estableció el mismo tribunal: cada acción lesiona el bien jurídico. Asimismo, se verifica una unidad de lesión jurídica, ya que se reconoce que se lesionaba con cada hecho la libertad sexual de la víctima; se constata un dolo global destinado a la misma acción, al mismo delito y mismo bien jurídico, que consistía precisamente en el acto de violación en contra de la niña y, finalmente se revela el vínculo objetivo: hay una misma acción que realizaba la persona, que consistía en violar a la víctima, hay unidad precisamente de víctima en torno a que siempre fue la misma y no existió variación en ello.

Por ello, no es efectivo, como lo sostiene los jueces bases, que el delito continuado no se aplica respecto de bienes jurídicos personalísimos, conforme a la doctrina que cita; incorrección que también se observa en la afirmación de que el delito continuado no tendría aplicación en Chile, pues si bien dicha figura carece de sustento normativo explícito, la jurisprudencia se ha manifestado en el sentido de que, concurriendo los requisitos doctrinarios del mismo, el sentenciador debe aplicarlo, ya que de lo contrario, incurre en un error de derecho que puede dar lugar a la anulación de la sentencia. Ello, porque si bien su fundamento inicial reside en consideraciones de proporcionalidad o de carácter político-criminal, es posible encontrar una justificación en consideraciones de economía procesal, en el sentido de facilitar la labor probatoria que pesa sobre el órgano persecutor.

15°.- Que sobre este asunto, la falta de reconocimiento positivo que presenta el delito continuado en nuestro ordenamiento jurídico, hace necesario recurrir a su única fuente, que se encuentra en la doctrina y cierta jurisprudencia minoritaria. En aquella, tal figura es definida como aquel constituido por dos o más acciones u omisiones separadas por un cierto tiempo que, no obstante integrar cada una de ellas por separado la misma figura fundamental del delito, se valoran como uno solo, debido a la homogeneidad de sus elementos. Se dice que para estar en presencia de un delito continuado deben concurrir una serie de requisitos, tanto objetivos como subjetivos. Del primer orden son: la pluralidad de acciones u omisiones, la unidad de ley violada y, para



algunos, la identidad del sujeto pasivo. El requisito de índole subjetiva está constituido por la unidad de designio, propósito, intención o dolo. También se incluyen ciertos elementos de carácter secundario que, fundamentalmente, permiten dar por establecido alguno de los requisitos mencionados. Aquí se ubican la unidad o identidad de ocasión, la conexión espacial y temporal, y el empleo de medios semejantes.

16°.- Que, entonces, si en Chile la figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal, resulta improcedente sostener la infracción de ley en virtud de una hipótesis que no encuentra sustento normativo, a diferencia de lo que acontece con el llamado delito reiterado que regula el artículo 351 del Código Procesal Penal, y que por lo mismo, obliga a la judicatura a considerarlo en su aplicación cuando concurren los supuestos de hecho que la norma prevé.

A pesar de lo dicho, cierta jurisprudencia ha aceptado la aplicación de los delitos continuados como política morigeradora de penas para los delitos contra la propiedad o en los que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones.

17°.- Que conforme a lo dicho, en el caso de marras, no cabe aplicar esta figura, en atención a que los hechos afincados en el fallo que se revisa dan cuenta que el condenado transgredió la indemnidad sexual de la víctima en forma separada, en diversas oportunidades, en un distinto contexto situacional y sin unidad de conciencia colectiva, en tanto los delitos se fueron consumando a medida que se presentaban aisladamente las condiciones necesarias para su comisión, pues los hechos acreditados en el juicio se encuentran constituidos por la pluralidad de oportunidades en que se produjeron estos actos, pudiendo establecerse su ocurrencia en variados momentos a partir del año 2017. La reiteración exige que se establezca la comisión de más de un delito de la misma especie, cuyo es el caso de autos.

18°.- Que como corolario de lo expuesto, solo resta desestimar el recurso de nulidad en todos sus extremos.

Y visto, también, lo dispuesto en los artículos 372, 373, 376 y 385 del Código Procesal Penal, **se rechaza sin costas**, el recurso de



nulidad impetrado por el defensor penal, actuando en representación del condenado Jorge Luis Pereira Núñez, contra la sentencia de siete de junio último, dictada por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en la causa RUC N° 1900522329-9, RIT 78-2020, la que, por ende, no es nula.

Acordada la decisión de eximir a la defensa del pago de las costas, con el voto en contra de la ministra Leyton Varela, quien fue de opinión de imponer a la defensa esa carga, teniendo en especial consideración que el recurso no aparece deducido sobre premisas que hicieran plausibles su interposición, de manera que no concurre en la especie, de conformidad a los artículos 47 inciso 3° y 52 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 145 del Código Procedimiento Civil, ninguna causal que permita su exoneración.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la ministra Lilian Leyton Varela.

N°Penal-2619-2021.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Mireya López Miranda e integrada por la Ministra señora Lilian Leyton Varela y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández- No firma la Ministra señora López por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, nueve de agosto de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

